

VULNERABILIDAD SOCIAL Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS Y REUBICADAS EN SONORA Y SINALOA (NOROESTE DE MÉXICO)

Omar Mancera González

Universidad Autónoma de Sinaloa
omancerag@uas.edu.mx

Carmen Egea Jiménez

Universidad de Granada
cegea@ugr.es

Recibido: 11 de octubre 2021; Revisado 11 de marzo 2022; Aceptado: 14 de enero 2022

Vulnerabilidad social y estrategias de afrontamiento de las familias desplazadas y reubicadas en Sonora y Sinaloa (Noroeste de México). (Resumen)

La vulnerabilidad social se asimila con frecuencia a las desigualdades, pobreza y los grupos que, a priori, se consideran vulnerables. Esto obvia un aspecto novedoso de este enfoque: la capacidad que tiene una persona, grupo o comunidad de construir estrategias de afrontamiento para enfrentar situaciones complicadas e imprevistas. En este estudio, el enfoque de la vulnerabilidad social se usa como una herramienta teórica y metodológica para analizar cómo las familias desplazadas y posteriormente reubicadas por la construcción de embalses en Sinaloa y Sonora enfrentan la reubicación. El análisis se basa en fuentes de diferente naturaleza: estadística, documental y trabajo de campo basado en el método etnográfico. Los resultados muestran que, a pesar de las características de cada proyecto hidráulico, las familias construyen estrategias de afrontamiento similares para vencer la situación de vulnerabilidad que supone la adaptación al nuevo emplazamiento, las cuáles implican a su vez un proceso de empoderamiento.

Palabras clave: vulnerabilidad social; estrategias de afrontamiento; relocalización; empoderamiento; Noroeste de México.

Social vulnerability and coping strategies for displaced and relocated families in Sonora and Sinaloa (Northwest Mexico). (Abstract)

Social vulnerability is frequently assimilated to inequalities, poverty and groups that, a priori, are considered vulnerable. This obviates a novel aspect of this approach: the ability of a person, group or community to build coping strategies to face complicated and unforeseen situations. In this study, the social vulnerability approach is used as a theoretical and methodological tool to analyze how families displaced and later relocated by the construction of reservoirs in Sinaloa and Sonora face relocation. The analysis is based on sources of different nature: statistics, documentary and field work based on the ethnographic method. The results show that, despite the characteristics of each hydraulic project, families build similar coping strategies to overcome the situation of vulnerability that adaptation to the new location implies, which in turn imply a process of empowerment.

Key words: social vulnerability; coping strategies; relocation; empowerment; Northwest Mexico.

Uno de los logros más importantes en el contenido conceptual de la vulnerabilidad social es el que tiene lugar entre finales del siglo XX y comienzos del XXI por parte de la CEPAL-CELADE. Las continuas crisis en América Latina obligan a replantearse la necesidad de superar enfoques como el de la pobreza para investigar cómo la población subsiste en medio de continuos vaivenes económicos y sociales, siendo quizás una abultada y heterogénea clase media la más afectada por dichas situaciones de incertidumbre. Los textos científicos que se generan en ese momento para definir el que puede ser uno de los enfoques más interesantes de las ciencias sociales, son un punto de partida importante tanto desde el punto de vista teórico como metodológico (Rodríguez 2000; Busso 2001; Filgueira 2001; Hopenhayn 2001). Sus aportaciones son numerosas, señalándose aquí dos de interés para este estudio: asumir en la investigación que las personas, familias, grupos y comunidades tienen capacidad para superar situaciones difíciles, sobrevenidas, y que el estudio de la vulnerabilidad social se apoya en dos elementos fundamentales: los riesgos y las estrategias de afrontamiento, siendo precisamente estas estrategias las que dan protagonismo al primer aspecto señalado, la capacidad con la que se cuenta para solventar situaciones complicadas o imprevistas (Egea et al. 2012); esto también aporta otra novedad, la de entender que se está ante un proceso dinámico que es posible superar dependiendo de los activos o recursos con los que se cuenten para diseñar las estrategias (Pérez 1999). Los "activos" son el conjunto de recursos tangibles (materiales) e intangibles (inmateriales) proporcionados desde tres ámbitos: el personal, el legislativo y el social (Moser 1998, Attanasio y Székely 1999, Esping 2000, Kaztman 1999, Filgueira 2001). Por ejemplo, son *activos* el capital financiero y físico (bienes materiales), el capital humano (salud, formación académica, la edad, destrezas, actitud personal) y el capital social (redes sociales, conocimiento de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, prestaciones sociales).

Los estudios realizados a lo largo de este siglo XXI son una clara evidencia de la consideración en el ámbito académico-científico del concepto de vulnerabilidad con una dimensión social, abordándolo desde diferentes perspectivas, ámbitos y/o colectivos (Alcina 2003, Neuburger 2004, Stern 2004, Álvarez et al. 2006, Mora y Pérez 2006, Reyes y Gijón 2007, Bueno y Diniz 2008, Cuevas y Escobar 2009, Sánchez y Egea 2011, Aguilar et al. 2012, Cadena y Campos 2012, García y Villerías 2016, Aristegui et al. 2017, Ortíz y Díaz 2018, Salamanca y Egea 2018, Ramírez et al. 2019, Jiménez et al. 2021). Sin embargo, en ocasiones, los estudios que manejan el concepto de vulnerabilidad social tienden a asimilarlo a "pobreza", "exclusión", "marginación", "vulneración de los derechos humanos", aún cuando todas las personas puedan ser vulnerables indistintamente de su situación socioeconómica. Así, una buena parte de los trabajos se centran en grupos considerados a priori como vulnerables para analizarlos desde alguna de esas perspectivas, no siendo tan frecuentes aquellos que tratan los "activos" con los que cuentan las personas de esos grupos para enfrentar la situación en la que se encuentran. Cabe matizar que si bien el término "estrategia de afrontamiento" es muy usado en la investigación del ámbito de la salud, en los estudios de las ciencias sociales la expresión frecuente es "estrategia de supervivencia" (Prieto 2009, Valverde 2012, Cayuela 2013, Carcedo 2014, Fabre y Egea 2015; López et al. 2018; Meneses 2019, Castellón 2021, Romano 2021).

Aquí, se usa "estrategia de afrontamiento" para entender que las familias objeto de estudio ponen en juego una serie de "activos" para enfrentar los aspectos que le son desfavorables en una situación sobrevenida como, en este caso, la derivada de su reubicación como consecuencia de la construcción de embalses. Así, se analizan familias que si bien ya se encontraban en una situación de desventaja socio-económica previa a la construcción de los embalses, esta se ve agravada cuando son forzadas no solo a desplazarse sino a reubicarse en lugares no deseados. Las "estrategias de afrontamiento" se abordan en este trabajo como una herramienta teórica y metodológica para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿cómo las familias reubicadas por la construcción de embalses en los estados de Sinaloa y Sonora en el noroeste mexicano enfrentan el desplazamiento forzado y la reubicación? Para dar respuesta a esta pregunta se plantean dos objetivos: por un lado, analizar la situación de vulnerabilidad social de partida y, por otro, las estrategias de afrontamiento diseñadas, muchas de ellas de carácter pacífico y que implican también un proceso de empoderamiento de la población reasentada.

Este tipo de desplazamiento se enmarca en las migraciones forzadas, en concreto en aquellas en que la población es desplazada por grandes obras de infraestructura; son los *desplazados inducidos por el desarrollo*, en este caso por la construcción de obras hidráulicas, justificadas por buscar el bien común y compensar los desequilibrios territoriales. No obstante, son numerosos los casos en los que las personas más afectadas son las más desfavorecidas y a las que no llegan siempre las suficientes compensaciones por las pérdidas materiales, por no hablar de las emocionales y espirituales (Flores 2009, Tejada y Annette 2010, Duarte y Sterza 2011, Sarmiento 2015, Cañedo y Mendoza 2017, Evaristo y Lima 2018).

Finalmente, en el artículo se hace referencia de forma breve al concepto de "empoderamiento". El término *empowerment* (empoderamiento) se refiere a una situación en la que el individuo es responsable de su conducta y de los cambios en su vida Solomon (1976), por lo que puede crear circunstancias que la mejoren. Rappaport (1981) amplía esta idea y considera el empoderamiento como un proceso donde las personas en sus ámbitos personales, familiares o sociales pueden transformar sus vidas y generar cambios en sus comunidades mediante acciones específicas que finalmente las empoderan. Los activos personales y comunitarios de los individuos conforman un capital social -empoderador y transformador- que puede aplicarse a instituciones u organizaciones, siendo precisamente la construcción de esos activos el fundamento del empoderamiento (Minkler 1992, Israel et al. 1994), potencial innato en todas las personas aunque lo desconozcan (Sadan 1997). De esta forma el empoderamiento es un proceso social y multifuncional (Muñoz et al. 2018).

El estudio presentado aquí se centra en 24 comunidades, creadas para reubicar a un total de 5.038 familias desplazadas por la construcción de embalses en dos estados del Noreste de México, Sonora y Sinaloa (Figura 1). En Sonora se crean 7, donde se ubican un total de 564 familias procedentes de seis pueblos anegados por el agua de 4 embalses; en Sinaloa son 17 las

creadas para albergar 4.474 familias¹ procedentes de 198 pueblos inundados por 9 embalses (Figuras 5 y 6).

El análisis se aborda desde un método de triangulación en el que interviene información estadística, documental y trabajo de campo etnográfico desarrollado entre 2017 y 2019. La dinámica del trabajo de campo consistió en localizar *in situ*, ya que no hay fuentes oficiales, las comunidades reubicadas y los embalses construidos, realizando posteriormente observación directa y participante. En esta etapa de observación se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave, habitantes afectados por el traslado y/o sus descendientes directos cuando fue complicado entrevistar a las personas que vivieron directamente el desplazamiento debido a la longevidad de algunas reubicaciones (la más antigua data de 1945 y la última, hasta 2021, fue en 2009). El análisis del contenido de las entrevistas se ha realizado mediante un programa de la familia CAQDAS (Análisis de Datos Cualitativos Asistido por Ordenador), en concreto el producto comercial Atlas.ti v.8. Este análisis ha permitido reconstruir los escenarios del desplazamiento y la reubicación.

A partir de aquí, el texto se desarrolla en tres apartados. En primer lugar se exponen las características geográficas de la zona de estudio y la política hidráulica implantada en la misma; en segundo lugar, las características de las familias desplazadas y el impacto que en ellas tiene la reubicación; y en tercer lugar, las estrategias de afrontamiento diseñadas para enfrentar los efectos de una situación sobrevenida con la reubicación. El estudio termina con las conclusiones donde también queda de manifiesto cómo las mismas estrategias suponen el empoderamiento de las comunidades.

La zona de estudio y la política hidráulica

El noroeste de México es una de las cinco mesorregiones del Sistema de Planeación para el Desarrollo Regional integrada por los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur; ocupan una superficie de 384.417 km² donde viven 10.441.190 personas (INEGI, 2019). Los cuatro estados colindan con el Golfo de California, y Sinaloa y Baja California lo hace también con el océano Pacífico (Figura 1).

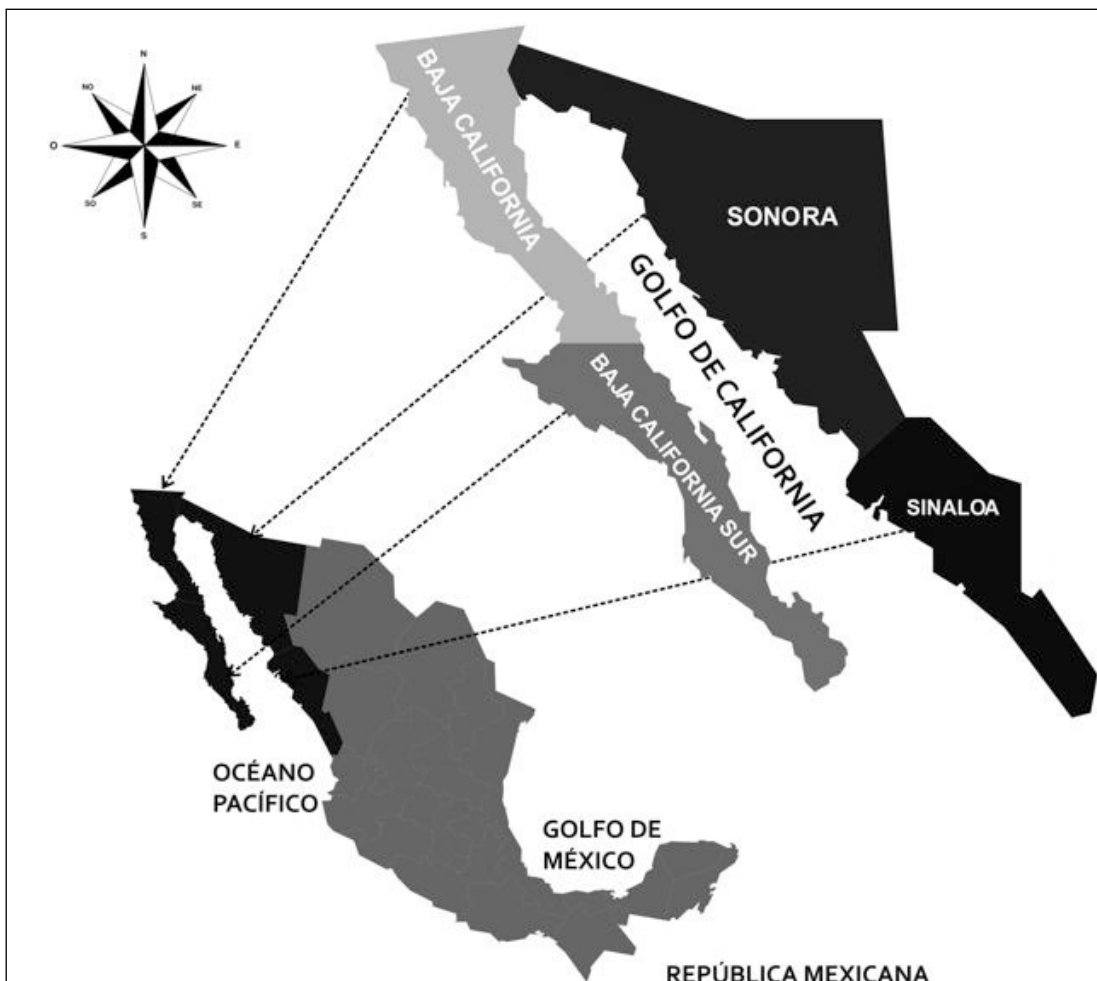
La construcción de embalses de gran envergadura en esta mesoregión tiene como función principal el regadío de cultivos y el abastecimiento de agua a poblaciones cercanas, aunque el porcentaje dedicado a este uso apenas supera el 3%. A diferencia de los embalses construidos en Baja California y Baja California Sur, donde la baja densidad no requirió desplazar y reubicar a población, los construidas en los estados de Sonora y Sinaloa obligaron a cientos de familias a abandonar sus hogares; se trata de proyectos desarrollistas que se

1 Aunque lo ideal sería contar con el número de personas desplazadas en lugar de familias, para dimensionar mejor el problema planteado, es complicado establecer la cifra porque los escasos conteos oficiales encontrados, así como los datos recabados en el trabajo etnográfico o en los registros mencionados más adelante, siempre aparecen por número de familias afectadas. Para evitar la arbitrariedad de aplicar una fórmula divisoria se optó por continuar con este dato, que aún permite dimensionar la magnitud de las relocalizaciones por la construcción de embalses en Sinaloa.

imponen de forma arbitraria y obligan a la población a reubicarse en tierras de baja productividad y, en ocasiones, alejadas de los embalses (Figura 2 y 3).

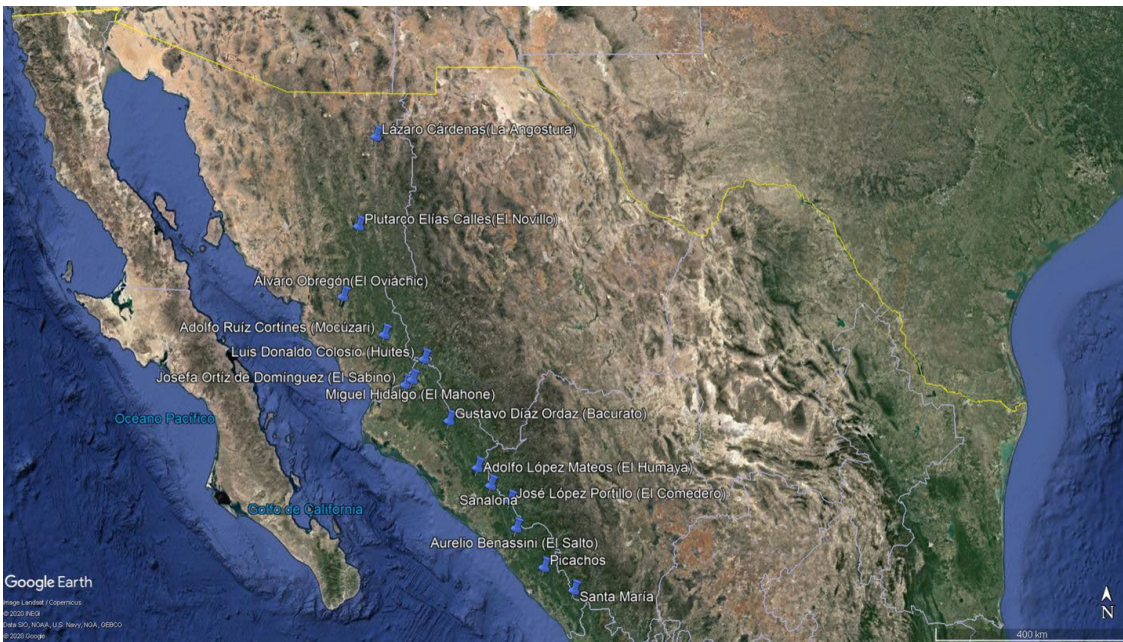
A pesar de que no existe una política regional y cada estado trabaja en sus respectivas estrategias de producción agropecuaria y pesquera, Sinaloa y Sonora por ser frontera agrícola de riego, comparten la infraestructura hidráulica, una compleja red de grandes embalses. El Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO) pretende incorporar, desde su aprobación en 1965, las cuencas hidrológicas de los 16 ríos de estos dos estados, y de uno más perteneciente al norte del estado de Nayarit (ubicado en la frontera sur de Sinaloa), para aprovechar los excedentes de agua y transferirla a las zonas de mayor sequía al norte de Sinaloa y el sur de Sonora (Figura 4). El plan contempla la habilitación de 793 kilómetros de vías de regadío desde el río Santiago (Nayarit) al río Yaqui (Sonora), y la construcción de embalses hidroeléctricos para aumentar la frontera agrícola en más de 250 mil hectáreas.

Figura 1. Ubicación geográfica del Noroeste de México.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.

Figura 2. Ubicación de los embalses en Sonora y Sinaloa.



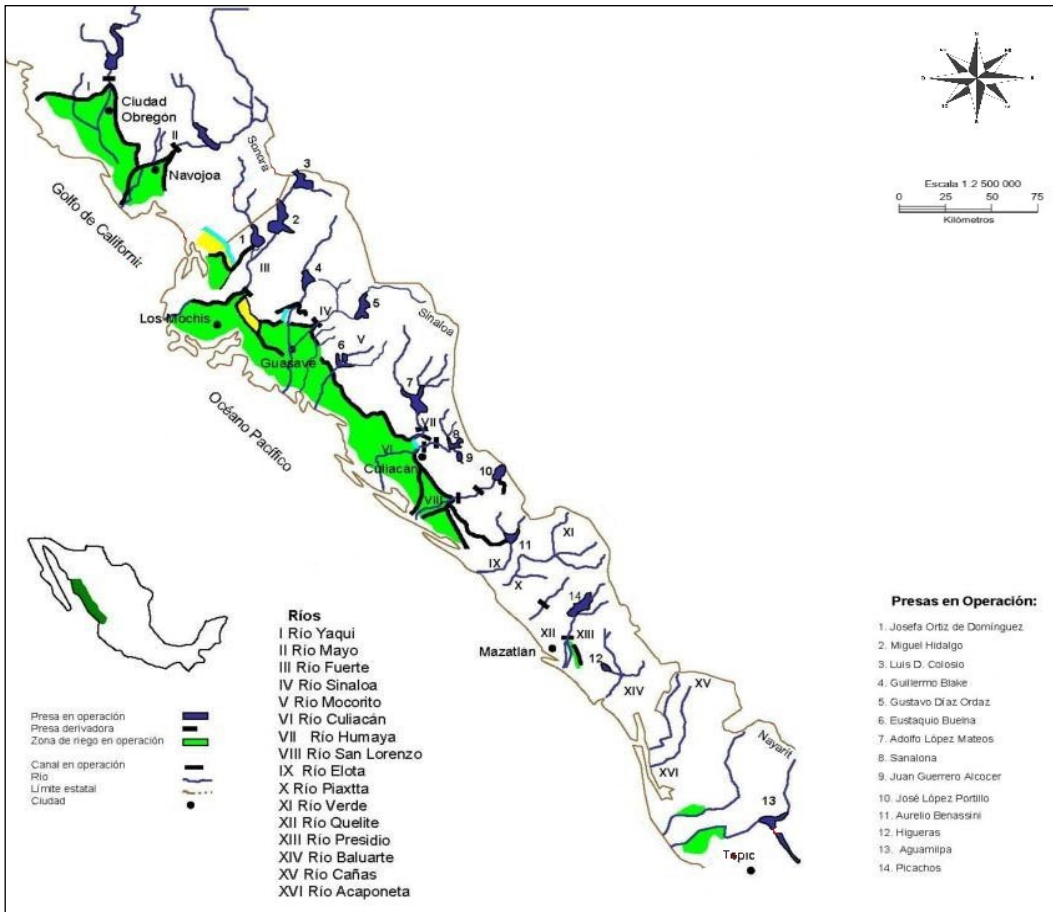
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Figura 3. Localización de los núcleos de reubicación.



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Figura 4. Proyección del Plan Hidráulico del Noroeste.



Fuente: Modificado de Senado de la República.

Como ocurre discursivamente con la construcción de embalses, el PLHINO vaticina la creación de empleos, abastecimiento de agua para el campo, la industria y las ciudades, la generación de energía eléctrica, el desarrollo del turismo y la piscicultura, aunque la premisa principal es el riego agrícola; de manera que el agua es en, casi su totalidad, para la agricultura.

Además de la importancia del sector agrícola, también está desarrollada la ganadería, la pesca y el sector turístico por la riqueza natural y marítima donde se alojan importantes destinos turísticos del país (Mazatlán, Los Cabos, La Paz, Puerto Peñasco), puertos marítimos (Mazatlán, Topolobampo, Guaymas, Puerto Libertad, Ensenada, La Paz, Santa Rosalía y Loreto), así como 9 áreas naturales protegidas y 898 islas, islotes, rocas e isletas -la mitad del patrimonio insular del país- ubicadas en el Golfo de California, cuya biodiversidad marina y terrestre es de las más importantes en el planeta (CONANP 2000).

La política hidráulica desarrollista en México se ha concretado en la construcción de grandes embalses, una prioridad estatal mantenida durante décadas en la agenda política. En el noroeste esta política ha transformado una zona árida, de orografía complicada y alejada del

centro del país en un importante área productora de alimentos para el mercado nacional e internacional, colocándose en los primeros lugares en el cultivo de productos estratégicos y en el uso de tecnología agrícola. Este avance se ha logrado con el binomio agricultura de riego-infraestructura hidráulica; ambos elementos son co-dependientes, la existencia de uno depende de los activos del otro, por lo que las grandes producciones de granos, hortalizas y forrajes son posibles con el sistema de riego y de infraestructura hidráulica.

El Atlas Agroalimentario (SAGARPA 2017) señala a Sinaloa como líder nacional en la producción de tomate, maíz, garbanzo, berenjena, ajonjolí, pepino y tomate verde; y a Sonora líder en la producción de espárrago, melón, papa, calabacita, uva, trigo, cártamo y sandía. En el cultivo de uva pasa, Sonora y Baja California abastecen totalmente al mercado mexicano. En ganadería, pesca y acuicultura de camarón, sectores importantes en la región, Sonora y Sinaloa cubren más de la mitad de la producción nacional. Finalmente, Sinaloa se posiciona como líder en agricultura de invernaderos.

A pesar de la vasta producción agropecuaria, la disponibilidad de agua pluvial es escasa debido al clima árido, los desiertos y la cercanía al llamado “cinturón del sol” en Estados Unidos de Norteamérica. Según datos del Centro de Información del Agua, el noreste de México es una de las regiones de mayor aridez en el país, lo cual genera un modelo de agricultura dependiente del riego que explica la vasta infraestructura hidráulica, desde la construcción de grandes embalses hasta otra secundaria como embalses, diques, bordos, canales, módulos y Distritos de Riego². La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA 2018) estima que el 18% de las 30 millones de hectáreas de cultivo en México corresponden al modelo de riego, y a pesar de ser una proporción menor con respecto a lo que se cultiva en el país, la tendencia es incrementarlo por considerarlo tres veces más productivos que el modelo tradicional de cultivo de *temporada* sustentando en el ciclo de precipitaciones; así como en otros que obedecen a la vocación ambiental de cada región (pantano, terrazas, entre otras).

Las fuentes de agua superficial en el noroeste son escasas en comparación con otras zonas del país, por lo que se prioriza la construcción de embalses de gran envergadura para almacenar agua (el 98%) con fines agrícolas. Esta habilitación de embalses en zonas fértiles, irrigadas de forma natural por los ríos, ha desencadenado el desplazamiento forzado de miles de familias desde la década de 1940. Como se mencionó anteriormente, en el estado de Sinaloa se desplazaron a 4.474 familias, y se espera que el embalse Santa María (en construcción) desplace a 270 más. Por su parte, en el estado de Sonora fueron 564 familias desplazadas, principalmente en la segunda mitad del siglo anterior (en la Figura 5 se detallan).

Las especificaciones generales de los embalses que generaron el desplazamiento de más de cinco mil familias en 64 años (en 1945 el primero y en 2009 el último) se ilustran en la Figura 5, enumerando además el número de familias reubicadas por cada proyecto hidráulico. Tres de

² Los Distritos de Riego “son proyectos de irrigación desarrollados por el Gobierno Federal desde 1926, año de creación de la Comisión Nacional de Irrigación, e incluyen diversas obras, tales como vasos de almacenamiento, derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales y caminos, entre otros”.
<http://www.conagua.gob.mx/atlas/usosdelagua32.html>

los embalses (Huites, El Mahone y El Sabino) se encuentran en los mismos municipios (Choix y El Fuerte), mientras que el resto están ubicados en municipalidades distintas. Esto se debe a que se represó el caudal del mismo río o una vertiente del mismo, mientras que en otros casos como en Picachos, el agua almacenada abarca una amplia extensión territorial, cubriendo el territorio de dos municipios.

Figura 5. Embalses, fecha de construcción y volumen de familias desplazadas.

Estado	Nombre del embalse	Fecha de construcción	Municipio de ubicación del embalse	Número de familias desplazadas
Sinaloa	Luis Donald Colosio (Huites)	1992-1995	Choix	930
	Miguel Hidalgo (El Mahone)	1952-1956	El Fuerte y Choix	835
	Josefa Ortiz de Domínguez (El Sabino)	1965-1967	El Fuerte	220
	Gustavo Díaz Ordaz (Bacurato)	1977-1981	Sinaloa de Leyva	133
	Adolfo López Mateos (El Humaya)	1957-1964	Badiraguato	540
	Sanalona	1939-1948	Culiacán	109
	José López Portillo (El Comedero)	1977-1983	Cosalá	707
	Aurelio Benassini (El Salto)	1981-1988	Elota	200
Sonora	Picachos	2005-2009	Mazatlán y Concordia	800
	Álvaro Obregón (El Oviáchic)	1947-1952	Cajeme	200
	Plutarco Elías Calles (El Novillo)	1958-1964	Soyopa	140
	Lázaro Cárdenas (La Angostura)	1936-1942	Nacoziari de García	59
	Adolfo Ruíz Cortines (Mocúzari)	1952-1955	Alamos	165

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAGUA (2018), Evans (2006), Enríquez y Durán (2017), Autor (2019), Celaya (2015) y DOF (2010).

Características de la población desplazada

Para reubicar a las 5.038 familias afectadas se construyeron 24 nuevos pueblos, distribuidos en 15 municipios (Figura 6), localizados en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, lejos de los embalses que originaron los desplazamientos. En Sinaloa, 10 nuevos pueblos se ubicaron en los valles costeros de producción agrícola de riego, mientras que en Sonora sólo tres localidades, Nueva Casa de Teras, Comisaria Esperanza y Cumuripa, se encuentran en zonas de estas características agrícolas. Finalmente, de los 24 nuevos pueblos construidos en ambos estados para relocalizar a las familias, 14 quedaron a cientos de kilómetros de las localidades de origen (ahora anegadas), representando adicionalmente un desfase espacial. En la Figura 6 también puede apreciarse que algunas familias se relocalizaron en la misma fecha porque fueron afectadas por el mismo embalse.

Figura 6. Comunidades donde fueron reubicados los desplazados.

Estado	Embalse	Comunidades de reubicación	Municipio	Año de la relocalización
Sinaloa	Luis Donald Colosio (Huites)	Las Cruces y Pueblo Nuevo Huites	Choix	1994
	Miguel Hidalgo (El Mahone)	Juan José Ríos	Guasave y Ahome	1955
		Adolfo Ruíz Cortines	Guasave	1955
	Josefa Ortiz de Domínguez (El Sabino)	Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	Ahome	1969
	Gustavo Díaz Ordaz (Bacurato)	El Mezquite Alto	Sinaloa de Leyva	1979
		Terahuito	Guasave	1979
	Adolfo López Mateos (El Humaya)	Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo)	Culiacán	1962
	Sanalona	Villa Benito Juárez	Navolato	1945
	José López Portillo (El Comedero)	Pueblos Unidos	Culiacán	1979
	Aurelio Benassini (El Salto)	San José Conitaca, El Salto Grande y Pueblo Nuevo	Eloa	1988
Picachos	San Marcos, y Puerta de San Marcos	Mazatlán	2009	
	Las Iguanas y Casas Viejas	Concordia	2009	
Sonora	Plutarco Elías Calles (El Novillo)	San José de Batuc, Nuevo Suaqui y Nuevo Tepupa	San Pedro de la Cueva	1964
	Álvaro Obregón (El Oviáchic)	Comisaria Esperanza y Cumuripa	Ciudad Obregón	1952
	Lázaro Cárdenas (La Angostura)	Nueva Casa de Teras	Cajeme	1940
	Adolfo Ruíz Cortines (Mocúzari)	El Mocúzari	Álamos	1955

Fuente: Elaboración propia.

La distancia entre las localidades de origen y las de reubicación se justificó con el argumento de estar menos aisladas (pues estaban en la Sierra Madre Occidental o al pie de la misma), para que pudieran labrar las tierras de regadío otorgadas en restitución en los valles agrícolas y para estar más próximas a las ciudades y a las redes de comunicación terrestre. No obstante de estas intenciones, el desplazamiento representó una carencia de apropiación y significación del espacio y un sentimiento de desarraigo cultural y simbólico.

El desplazamiento hacia el valle central y hacia las ciudades, la conectividad con las carreteras, así como con las redes de comercio y las actividades primarias (agricultura y ganadería) podría considerarse favorable; sin embargo, las personas entrevistadas coinciden en que la comunicación terrestre y el acceso a mejores servicios de educación y de salud no compensa la marginación que padecen, la falta de oportunidades de desarrollo, y tampoco sustituye el sentimiento de arraigo que poseían con sus lugares de origen.

Previo al desplazamiento forzado, las poblaciones se dedicaban a la agricultura de *temporada* en las tierras próximas a los ríos represados o en zonas irrigadas por los mismos. Casi todos los pueblos inundados tenían carencias de accesos pavimentados, carreteras rápidas a los centros urbanos cercanos y servicios de comunicación, atención médica, recolección de basura, seguridad y alumbrado público. Por otro lado, en los pueblos de origen las viviendas eran grandes, con espacios amplios destinados a habitaciones, sala-comedor, baños o almacenes. Las cocinas se encontraban fuera de la casa, en la parte posterior o a un lado, habilitadas sólo con un cobertizo que las protegía de la lluvia, sin paredes y con muebles fabricados en cemento, piedra, adobe o madera. Las casas estaban construidas en su mayoría de adobe, con techos de teja y pórticos amplios en la entrada donde solían pasar las tardes conversando, compartiendo una bebida o haciendo labores como desgranar maíz. La función de esos espacios, llamados porches, era principalmente mitigar el calor y refrescar con el aire vespertino. Otras viviendas, las más antiguas, estaban fabricadas de varas (llamadas "latas") recubiertas de lodo, con techo de palma o de teja. Estos contrastes en la tipología de las viviendas a su vez servían como un elemento de diferenciación entre los habitantes de cada localidad que, al igual que la ubicación geográfica dentro del pueblo, otorgaba a cada núcleo familiar que la habitaba estatus social o económico, prestigio o representatividad.

Los informantes clave de cada localidad y otros vecinos entrevistados narraron que en los pueblos hoy anegados no tenían luz eléctrica, agua potable y drenaje sanitario. La mayoría de esas comunidades tampoco contaban con servicio de transporte público ("tranvía" según el apelativo regional); la habilitación de rutas de transporte y carreteras conectadas con las ciudades más cercanas, que redujeron los tiempos de traslado, fueron una de las principales medidas compensatorias.

Igualmente, la dotación de escuelas fueron medidas compensatorias atractivas que ayudaron a que los habitantes de las nuevas comunidades tuvieran más oportunidades de instrucción escolar, debido a que anteriormente quienes querían estudiar debían desplazarse a poblaciones vecinas e incluso a las ciudades más cercanas, según el grado escolar que se cursase. Las escuelas primarias eran las más cercanas, incluso algunas secundarias, aunque llegado a este nivel muchas personas abandonaban los estudios debido a que las escuelas preparatorias y universidades estaban en los centros urbanos lo cual suponía una limitante por los costes económicos de residir en otro lugar, o resultaba imposible el traslado diario por falta de rutas de transporte público.

En cuanto a los servicios de salud, en todas las nuevas comunidades se habilitaron centros de atención sanitaria que, a pesar de no instaurarse a corto plazo en la mayoría de los poblados, sí representaron un cambio en la calidad de vida. Los entrevistados coincidieron en que antes de la reubicación los bebés nacían con parteras y las emergencias o consultas médicas debían atenderse lejos de los pueblos, recurriendo en ocasiones al favor de los vecinos que contaban con automóvil; era una dinámica en la que se insertaban los pobladores de los viejos pueblos, habitual y con estrategias particulares para sortearla.

La implementación de servicios de salud en todos los nuevos pueblos fue una medida positiva que reconocen los desplazados, al igual que la mejora en la infraestructura urbana, las carreteras, las comunicaciones y la cercanía campo-ciudad.

Estas diferencias que aluden a la dotación de equipamientos y servicios son un parteaguas en la vida personal, familiar y comunitaria de las poblaciones relocalizadas que, sumado al proceso de construcción de los embalses, transformaron los estilos de vida y generaron nuevos parámetros de convivencia, habitabilidad y desplazamiento, así como cercanía al modelo neoliberal y sus premisas de mercado. “El rancho progresó” es una sentencia común en los nuevos asentamientos, pero sólo en lo referente a la composición urbana y a los servicios públicos.

Por otro lado, otra diferencia es la independencia productiva, ya que en los viejos pueblos (hoy anegados por los embalses) las personas poseían tierras productivas que labraban de acuerdo a un sistema ligado a las estaciones del año, con base a sus necesidades de alimentación o comercio, pero en las comunidades de reasentamiento dependen de las dinámicas de la extensiva industria agrícola que se desarrolla con amplitud en Sonora y Sinaloa, así como de su mercado nacional e internacional de alimentos, ya que las pocas tierras entregadas en restitución se convierten al modelo de regadío y con ello también las estrategias de producción.

Después de la relocalización de las comunidades estudiadas se presentaron problemas sociales que aún persisten, como la carencia de tierras productivas para el cultivo, o las limitadas condiciones para el desarrollo de la pesca comercial y deportiva, a pesar de las posibilidades que ofrecen los embalses para estas actividades. Las condiciones previas de vulnerabilidad social se trasladaron con las personas desplazadas, incrementándose con la obligada reconversión productiva (al cambiar la agricultura por la pesca) y con la adaptación a las nuevas condiciones de habitabilidad y vecindad impuestas por la disposición espacial de los nuevos asentamientos. También es común la carencia de oportunidades de empleo o autoempleo, de programas de desarrollo comunitario o de atracción de inversiones.

Las situaciones de pobreza, la carencia de servicios públicos y carreteras óptimas, la economía basada en la agricultura de temporada, la falta de escuelas, hospitales u otras infraestructuras urbanas básicas, se resolvieron en parte, pero se abonaron nuevos riesgos. Además, durante los procesos de relocalización las principales carencias fueron el transporte, la ayuda para la mudanza y la adaptación al nuevo entorno, que se sortearon gracias a las estrategias comunitarias de solidaridad y ayuda mutua entre vecinos. La reconversión productiva, con su falta de conocimientos para dedicarse a otra actividad, fue una vulnerabilidad heredada por el traslado, y a esa se le sumaron otras con el transcurso del tiempo, según el desarrollo particular de cada comunidad.

A pesar de que los nuevos pueblos ofrecen ventajas a sus habitantes en servicios públicos, transporte, cercanía a los centros urbanos, educación y tierras de regadío (en la mayoría de los casos), se registra una paradoja que contradice al discurso oficial desarrollista que justificó –y continúa justificando– la construcción de embalses. La modernidad, el

“desarrollo” y la infraestructura urbana necesaria no generan riqueza, bienestar social o mejoras en la calidad de vida de las personas desplazadas. En los nuevos asentamientos hay niveles de inseguridad crecientes, las actividades ilícitas son más comunes y los índices de marginación no se abaten o reducen (CONAPO 2016). Las actividades ilícitas son nuevas formas de vulneración, pues imponen dinámicas violentas y cambian el sentido de las relaciones sociales y de la vida cotidiana de las personas que cada vez son más comunes en las zonas rurales mexicanas.

Otro suceso que en términos simbólico-culturales fue de los más agresivos contra las comunidades relocalizadas fue la disposición de los panteones. Ningún cementerio fue relocalizado, excepto cuatro correspondientes a los afectados del embalse Picachos (Sinaloa); sin embargo, la medida resultó insuficiente porque el total de comunidades afectadas por esta obra alcanzó las 20 comunidades. En el resto de las localidades reubicadas, los deudos establecieron estrategias para recordar y preservar la memoria de sus seres queridos, doblemente sepultados bajo tierra y bajo cada embalse. Cuando el nivel del agua desciende a niveles que descubren los vestigios de los pueblos inundados (como ocurre en cada sequía), los desplazados acuden a los viejos panteones a colocar ofrendas a sus difuntos.

En cuanto a la afectación ambiental, los campos de cultivo se dañan porque la sobreexplotación genera problemas como la salinización, el uso excesivo de agroquímicos esteriliza los predios y los monocultivos impuestos por la demanda de alimentos extraen nutrientes que afectan el rendimiento de las siguientes siembras. Miles de hectáreas en Sinaloa y Sonora padecen pérdida de productividad por la salinidad y, aunque es oficialmente reconocida en los Planes Estatales de Gobierno de los últimos sexenios, (Mancera 2010) y estudiada a profundidad por académicos de ambas entidades, no se establecen políticas públicas que controlen el uso excesivo de agroquímicos en el campo, así como la sobreexplotación de las tierras de labranza. El uso intensivo de agroquímicos promueve un modelo de cultivo permanente y sobre explotador que afecta el ciclo natural de la tierra, así como la organización social de las comunidades campesinas. Las poblaciones relocalizadas e influenciadas por la agricultura intensiva están constantemente expuestas a los cambios socioambientales ocasionados por la agricultura de riego y su posible adaptación, en correspondencia con lo planteado por Vargas (2014), funciona más en el sentido de incorporarse al sistema agroextractivo como pequeños propietarios o como mano de obra barata.

Finalmente, la diversificación del ingreso que ha impuesto el crimen organizado en más de la mitad de las comunidades reubicadas se refiere a la incursión en el narcotráfico por parte de algunos integrantes de los nuevos pueblos, como una opción de desarrollo que el Estado no ofrece. En el siguiente apartado se mencionará cómo esta actividad es una "estrategia de afrontamiento" y de adaptación a las condiciones de vida en las comunidades desplazadas.

Estrategias de afrontamiento y empoderamiento

La construcción de embalses en el país cuenta con numerosos casos de movimientos sociales complejos que han exigido mejores condiciones en la reubicación, medidas compensatorias e indemnizaciones justas, así como la cobertura a los requerimientos de infraestructura urbana y la atención a las necesidades de la comunidad, entre otros asuntos (Barabás y Bartolomé 1992, Bartolomé y Barabás 1990, Foster 1976, Pérez 1992, Brito 2009, Fabre 2011). Estos y otros científicos sociales también han estudiado las consecuencias que las reubicaciones forzadas legaron a las comunidades.

Estos desplazamientos de población generan impactos negativos que, a largo plazo, afectan a las personas reubicadas e identifican a los grupos de poder, políticos o personas que capitalizan las coyunturas económicas o políticas; también se han denunciado los estragos en el medio ambiente local y regional, así como la pérdida de una parte sustancial de la identidad cultural de cada población reubicada (Palerm 1969, Aronsson 1992, Mancera 2014). No obstante, no hay que olvidar que algunas familias desplazadas se ven beneficiadas con la reubicación en términos de urbanización y comunicación, ya que quedan mejor conectadas por vía terrestre, cuentan con servicios de salud que en algunas poblaciones no existían, o se han priorizado a las personas desplazadas para acceder directamente a la pesca y el turismo en los embalses. En ambos estados de Sinaloa y Sonora, los gobiernos han emprendido, aunque con poco éxito, programas de promoción de la pesca y el turismo deportivo en los embalses; sin embargo, algo menos de la mitad de la población de cada localidad se incorpora a estos proyectos a través de sociedades cooperativas (un modelo comunal de comercialización y distribución de las ganancias), pescando para el autoconsumo o guiando a los turistas en actividades recreativas (pescar, navegar, nadar). La actividad es continua pero no alcanza para beneficiar a todas las comunidades, sobre todo a aquellas que fueron reubicadas lejos de los embalses, como ocurre con la mayoría de las sinaloenses.

Sin embargo, el análisis de cada localidad y su desarrollo socioeconómico desde la relocalización muestra que todos estos beneficios se podrían haber asegurado sin necesidad del desplazamiento, ya que el Estado debía asegurarles servicios públicos e infraestructura básica. Bajo esta hipótesis podría deducirse que estas poblaciones tendrían una mejor calidad de vida, una tasa menor de estrés y morbilidad³, una identidad cultural sólida, un desarrollo superior (pues las tierras anegadas siempre son más productivas que las otorgadas en restitución) y, por lo tanto, mayor capital per cápita y comunitario. El problema del desplazamiento es que detiene la dinámica tradicional de las comunidades, inserta a la población en lugares con una infraestructura y comunicaciones distintas, incluso mejores, pero no les garantiza formas de subsistencia y de empleo permanente porque los nuevos

3 Para Barabás y Bartolomé (1992), el estrés psicosocial se suma a las “condiciones ambientales dañinas” cuyas consecuencias son el incremento de la morbilidad y mortalidad entre la población relocalizada (1992, 10). En tres comunidades desplazadas se documentaron muertes asociadas a la depresión o al “trauma” de la relocalización; “nos la llevábamos llorando cuando nos cambiaron” fueron frases comunes en las entrevistas hechas a los vecinos de Pueblos Unidos, Las Iguanas, San Marcos, Pueblo Nuevo Huites y El Mezquite Alto.

asentamientos debieron buscar nuevas formas de sustento, al tiempo de adaptarse a ambientes distintos y en ocasiones disímiles al que estaban habituados.

La exigencia de adaptación que imprime la reubicación en una comunidad que mantenía un estilo de vida rutinario es excesiva y limitada en el tiempo porque en un breve periodo que no supera el año, las personas reubicadas deben adaptarse en lo básico a las condiciones de habitabilidad de las nuevas viviendas otorgadas en restitución, y buscar cómo producir en las nuevas tierras también otorgadas por el Estado (cuando esto ocurrió). Las dinámicas de asimilación al nuevo entorno en lo personal, familiar, social y productivo requieren estrategias nuevas y simultáneas porque los anteriores estilos de vida resultan inoperantes ahora (como el cultivo de la milpa bajo el esquema tradicional, la división sexual del trabajo o los rituales asociados a la agricultura, la construcción de viviendas, al matrimonio, entre otros). Para Palerm (1969) las reubicaciones forzadas “aceleran los cambios socioculturales, destruyendo la vida y la organización tradicional, haciendo entrar a la población más rápidamente que nunca en el sistema nacional de cultura, de economía y de política” (Palerm 1969, 1).

Las estrategias que las personas desplazadas desarrollan para gestionar su vulnerabilidad en los pueblos donde fueron reubicados se relacionan con la reactivación del tejido comunitario y de las redes sociales. Con ese sentimiento solidario pudieron ampliar o acondicionar las casas otorgadas por los gobiernos, acomodar a los animales de granja, sembrar huertos y árboles maderables, así como unirse en protesta y exigir a los gobiernos apoyos para la reconversión productiva, donde los agricultores tuvieron que hacerse a la pesca en los embalses, y también solicitar respaldo para la adquisición de insumos de pesca.

El "empoderamiento" logrado se ilustra mediante las acciones de resistencia de contrarrestar y confrontar al poder estatal y de las estrategias particulares, familiares o sociales que emprendieron como un mecanismo de defensa contra proyectos que parecen irrevocables porque surgen del Estado. En general, las personas emprendieron acciones transformadoras al tiempo que desarrollaron su potencial innato de empoderamiento, enmarcado en el contexto socio-político-histórico del momento de cada relocalización y de las coyunturas particulares de cada embalse (Sadan 1997).

La solidaridad como "estrategia de afrontamiento" es la principal característica del "empoderamiento" detectada durante la investigación, ya que sirve para la adaptación al nuevo entorno, transforma las dinámicas y relaciones sociales en cada comunidad, la relación Estado-comunidad y el posicionamiento regional de los nuevos pueblos y de sus habitantes. También se entienden como estrategias de afrontamiento los espacios, actitudes y acciones que las personas reubicadas asumen para contrarrestar la embestida desarrollista de los proyectos, resistir a las reubicaciones y adaptarse a la nueva ubicación con las dinámicas que esta impone desde el punto de vista geográfico, social, cultural, etc.

Como se mencionó en el apartado anterior, el narcotráfico se ha convertido en una actividad recurrente en la mayoría de los nuevos asentamientos, pero independientemente del lamentable e inevitable cambio en las dinámicas sociales y del aumento de la violencia en estas regiones, esta actividad representa una oportunidad para que las familias obtengan ingresos ya

que las tierras son infértiles, poco productivas, están ensalitradas o la producción de maíz, frijol y hortalizas se paga a bajo costo porque el gobierno establece los precios, o porque los intermediarios ("coyotes") compran las cosechas a precios extremadamente bajos, para posteriormente revenderlas con un incremento superior al cien por ciento. La carencia de apoyos gubernamentales como programas para la generación de empleo o autoempleo, para la atracción de agroindustrias dada la vocación agrícola, así como el desempleo o la precariedad de los salarios, son factores que facilitan la inserción y proliferación del narcotráfico en las comunidades relocalizadas.

Otra estrategia de la población es la emigración hacia las ciudades más cercanas, incluidas las de Estados Unidos de América (EUA). Esta migración está vaciando algunos poblados como Pueblo Nuevo Huites y El Salto (Sinaloa) o Nueva Casa de Teras y El Mocúzarit (Sonora); incluso en un par de localidades, la Comisaría Esperanza y la Colonia Cumuripa (Sonora), la mancha urbana de Ciudad Obregón integró a ambas localidades, de tal forma que no puede deducirse que hubo una migración sino una incorporación a la urbe.

Las inconformidades, temores e incertidumbre vertidas en las constantes reuniones que sostienen las personas afectadas con las instancias promotoras de cada embalse genera una conciencia compartida por la situación de arbitrariedad en la que se encuentran, por lo que consensuan estrategias focalizadas en aminorar el impacto en sus familias y en la población en general, como el incremento de asambleas comunitarias o la búsqueda de afectados de otros embalses dentro de la misma región, hechos que ocurrieron principalmente en el sur de Sinaloa. Aunque estas medidas solo tienen un impacto informativo, son importantes porque amalgaman los intereses de los habitantes y se van conformando las redes de ayuda y de reciprocidad aludidas. Las personas afectadas comienzan a reconocer el "empoderamiento" de la comunidad y a considerar los alcances y limitaciones de sus acciones (Sadan 1997).

Las movilizaciones sociales para exigir medidas compensatorias justas como manifestaciones, plantones, toma de las instalaciones del embalse, de oficinas gubernamentales o de vialidades en las ciudades próximas, son otros escenarios de empoderamiento, ya que los afectados logran posicionar en la opinión pública y en las esferas gubernamentales sus exigencias, logrando ampliar las indemnizaciones, las compensaciones o mejorar las condiciones de habitabilidad en los sitios donde serían reubicados. Un ejemplo de esto es que en todas las comunidades se exigió que el gobierno construyera iglesias católicas, así como oficinas para las autoridades locales como los comisarios. En el caso de las comunidades indígenas (norte de Sinaloa y sur de Sonora), también se exigió la construcción de centros ceremoniales.

Un caso distinto, y además el único registrado entre todas las poblaciones desplazadas en el noroeste de México, es el acontecido en el embalse Picachos, el último en construirse en Sinaloa (2005-2009). Aquí las 20 comunidades afectadas, con más de 800 familias, conformaron un movimiento de protesta que logró que el gobierno del estado de Sinaloa construyera cuatro pueblos para reubicarlos (Cañedo y Mendoza 2017, Mancera, 2010). Antes de esas movilizaciones no existían planes de reasentamiento por parte del gobierno, pues se

pretendía indemnizar y que las familias tomaran el dinero y se marcharan, una expulsión de su territorio que cambió con el movimiento de protesta y además estableció un parteaguas en la construcción de embalses en el noroeste, ya que el Estado se vio obligado a construir nuevos asentamientos frente a la idea de la dispersión. Esta "estrategia de afrontamiento" comunitario empoderó a las comunidades y, después de una década de la reubicación, varios líderes del movimiento o habitantes de los nuevos pueblos asesoran a otros desplazados, como ocurre con la actual construcción del embalse Santa María en el municipio El Rosario (Sinaloa).

La cobertura de los medios masivos de comunicación desde el inicio de la construcción de cada embalse hasta la relocalización forzada de las poblaciones es otra "estrategia de afrontamiento" utilizada habitualmente como un mecanismo de visibilización de las inconformidades al menos desde hace 20 años. El manejo de la información y la tendencia que el periodista le otorga atraen la empatía de espectadores o lectores del hecho informativo. Esa empatía es una herramienta de los afectados, ya que cuentan con el apoyo de la opinión pública al tiempo que legitiman sus acciones de protesta. Los ejemplos a nivel nacional y el registrado en Sinaloa con el embalse Picachos, ilustran cómo los medios de comunicación colocan el conflicto en un amplio escenario que puede alcanzar al contexto internacional, atrayendo a activistas, académicos y organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas dañadas por los proyectos de desarrollo.

Otras "estrategias de afrontamiento" detectadas en todos los desplazamientos en el noroeste de México, que fueron transformadoras y demostraron a las personas su capacidad de gestión, solidaridad y reconstrucción, fueron la adaptación a las nuevas condiciones de habitabilidad y la reconversión de las actividades productivas. Las estrategias adoptadas para unirse, resistir o negociar mejores condiciones de vida con el Estado, para afrontar la vulnerabilidad de las personas y de sus pueblos, empoderan y cambian el curso de los conflictos generados por cada proyecto hidráulico. En este sentido, un suceso común detectado en todos los procesos de relocalización, independiente al contexto histórico y político de cada época, fue la conformación de redes de reciprocidad altamente activas durante los meses posteriores al traslado de las familias. Se documentó que en todos los nuevos pueblos, desde el día siguiente del arribo, las personas contactaban a vecinos que supieran algún oficio como plomería, albañilería, carpintería, o que tuvieran habilidades para hacer enramadas, cercos perimetrales, corrales u otras estructuras necesarias para almacenar enseres domésticos o animales de granja. Como el dinero escaseaba implementaron formas de pago alternativas, como el intercambio de muebles, animales de granja o también de servicios, lo que además de reducir la vulnerabilidad de las familias se convirtió en una potencialidad del empoderamiento, transformada en capital social.

Para el análisis planteado en este artículo es indispensable aclarar que visualizar las acciones pacíficas, de cambio social y por ende de empoderamiento de las personas afectadas por los embalses, no invisibiliza la arbitrariedad, el abuso y la imposición unilateral de los proyectos, por el contrario, pretende establecer que en ese entorno violento las personas asumen estrategias de afrontamiento que las visibilizan ante otras instancias (las empoderan)

y con ello, como se demostrará, cambiaron el curso de los conflictos en distintos niveles: personal, familiar o social.

En las comunidades anegadas por el embalse Luis Donaldo Colosio (Huites), la CONAGUA y el gobierno estatal no dispusieron unidades para que las personas trasladaran sus pertenencias al nuevo pueblo. Los habitantes tuvieron que ayudarse entre ellos, aprovechando las camionetas de algunos vecinos, a quienes les “daban para la gasolina” a cambio de ayudarlos con la mudanza. En Juan José Ríos, uno de los dos pueblos creados para los desplazados del embalse Miguel Hidalgo (El Mahone), no tenían drenaje sanitario cuando llegaron, por lo que los vecinos habilitaron fosas sépticas afuera de las viviendas, ayudándose unos con otros en la excavación y habilitación del sistema.

Algo similar ocurrió en Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), creada para los habitantes de los pueblos inundados por el embalse Josefa Ortíz de Domínguez (El Sabino). En 1966 la Comisión del Río Fuerte (instancia que promovió y construyó la obra) cerró el desvío del afluente y comenzó el llenado del embalse, pero el nuevo pueblo aún no estaba terminado. Felizardo Reyes Valdés, quien vivió el traslado durante su juventud, recordó que de 1967 a 1969 los habitantes de los once pueblos afectados tuvieron que vivir en un asentamiento improvisado llamado El Mezquite, por lo que las estrategias de solidaridad e intercambio de servicios se implementaron en el pueblo temporal y en el definitivo (terminado en 1969).

Donde también hubo vicisitudes para adaptarse al nuevo poblado fue en Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo), asentamiento creado para los afectados del embalse Adolfo López Mateos (El Humaya). Los vecinos entrevistados coinciden en que al llegar al nuevo pueblo, en 1962, carecían de energía eléctrica, agua y drenaje sanitario. Adaptaron baños improvisados mientras se introducía el drenaje; para el suministro de agua potable la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), hoy denominada CONAGUA, habilitó tomas públicas ubicadas al inicio de cada calle. Como no había luz eléctrica todas las actividades eran diurnas, y para llevar agua a las viviendas cada familia enviaba a uno o dos integrantes a la toma pública, ayudando a los vecinos que por impedimentos físicos o por su edad no podían ir por agua.

En Campo Gobierno, hoy Villa Benito Juárez, los habitantes de los diez pueblos reubicados en 1945 por el embalse Sanalona recibieron un nuevo poblado con viviendas tan pequeñas que tuvieron que demolerlas para construir otras nuevas de acuerdo a sus necesidades, y además con carencia de servicios de agua, energía eléctrica y drenaje, recordó Luciano Duarte, de 91 años. En este caso el trabajo solidario se centró en sortear estas dificultades (resueltas por el Estado mexicano hasta la década de 1970), así como en la demolición, adecuación y construcción de las casas otorgadas en restitución por la SARH.

La solidaridad entre vecinos es permanente, pues el análisis de todas las experiencias señala que la ayuda entre las personas relocalizadas es el principal impulsor de la adaptación a los nuevos pueblos; las redes de reciprocidad operaron de forma similar desde la primera relocalización, en 1945, a la última en 2009. De esta forma la vulnerabilidad queda mitigada por

las 'estrategias de afrontamiento' que en este caso se traducen en estrategias de adaptación y confrontación de riesgos, y donde el empoderamiento discurre en paralelo a ellos.

Conclusiones

La construcción y operación de obras de desarrollo generan una afectación sistemática y fundamental que perjudica a las poblaciones inmersas en ellas, pues se trastorna su estilo de vida (componente social), se altera y perjudica el medioambiente próximo y regional (amenaza ambiental), se involucra a las comunidades en procesos, intereses y disputas políticas, se daña el patrimonio material de las familias (amenaza económica) y existe una coyuntura que enmarca estos elementos acentuando la exposición de los afectados, haciéndolos vulnerables.

La reubicación forzada de personas es un fenómeno coercitivo que ilustra la asimetría entre el gobierno y las poblaciones, representa la arbitrariedad gubernamental porque obedece a intereses partidarios, políticos y económicos de un grupo contra cientos o miles de personas cuyo poder económico e influencia no alcanza para librar una batalla contra el Estado.

Todas las comunidades reubicadas comparten los mismos problemas de marginación, reconversión productiva, vulnerabilidad y desarraigo cultural. Cambiar los instrumentos de labranza por los de pesca representa una transformación radical en la composición ontológica de un habitante de la sierra. Criados bajo un legado de generaciones de agricultores, las personas desplazadas y reubicadas enfrentan un cambio de actividad que implica aprender nuevas artes y manejar nuevas herramientas, además de suponer una reconfiguración simbólica entre el sujeto y el medio que lo sustenta. Así, la reconversión productiva es uno de los embates más difíciles que experimentan las personas reubicadas, ya que deben olvidar lo aprendido y transmitido de generación en generación y aprender un oficio nuevo a través de una capacitación gubernamental breve y urgente. La transformación que la reconversión productiva lega a las personas y a las comunidades es un aspecto que merece un análisis profundo e investigación a largo plazo, debido a la importancia social que implica cambiar la vocación de una zona por un proyecto impuesto desde un modelo desarrollista, político y neoliberal. Por ejemplo, entre el 10 y el 15 por ciento de las personas desplazadas y reubicadas junto a los embalses y cuyas tierras son infértiles, inaccesibles o poco rentables, se dedican a la pesca de especies comerciales para el autoabasto o el comercio a baja escala.

A pesar de que la mayoría de los nuevos pueblos o colonias creados por los gobiernos de Sonora y Sinaloa ofrecen ventajas a los desplazados en términos de servicios públicos, transporte, cercanía con los centros urbanos, educación y cultivos de regadío, se da una paradoja que contradice al discurso oficial, ya que este justifica la construcción de embalses como un símbolo de modernidad y desarrollo, cuando en realidad no es una infraestructura que genere riqueza, bienestar social y mejore la calidad de vida de las personas desplazadas. En sentido contrario, los 24 asentamientos que recibieron a miles de familias desplazadas ven aumentar los niveles de marginación y de inseguridad por las actividades ilícitas relacionadas con el cultivo y el comercio de droga, teniendo en cuenta que estas actividades también son

formas de vulnerar a las comunidades, pues imponen dinámicas violentas y cambian el sentido de las relaciones sociales y de la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, esta situación coloca a la población ante nuevos riesgos sociales y ambientales, donde la vulnerabilidad se puede convertir en antesala de la marginación y la pobreza (Sánchez y Egea 2011) que según el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2016) va en aumento en las poblaciones desplazadas.

El "empoderamiento" que logran estas personas como parte de las "estrategias de afrontamiento" se visibiliza a través de movimientos reivindicadores y de las estrategias de adaptación y confrontación durante el transcurso de cada proyecto hidráulico, como formas de resistir ante los embates de un sistema hegemónico y arbitrario. Los conflictos en torno a la construcción de embalses y la reubicación de familias, como parte de las conclusiones de los resultados de este estudio, acciona la gestión pacífica para lograr una cooperación reconstructiva y reconstituyente en lo social. Las interacciones comunitarias son elementos sustanciales del 'empoderamiento' y aunque no se conforman movimientos de protesta contra la mayoría de los proyectos hidráulicos son activos y empoderan a las personas afectadas porque comparten la misma incertidumbre y sentimiento de despojo.

En las familias desplazadas la cooperación es fundamental para disminuir su vulnerabilidad social, ya que las amenazas sociales, ambientales, políticas y económicas afectan sistémicamente a cada población (Mancera 2019). Durante la investigación se detectó que reconocían su vulnerabilidad y la escasa o nula capacidad para revertirla, optando por establecer alianzas que dinamizan, complejizan y mantienen activas sus redes sociales. El reconocimiento de su grado de exposición ante las amenazas, las alianzas y las redes sociales potenciaron el empoderamiento y el diseño de estrategias para afrontar sus riesgos. La vulnerabilidad social en este estudio se muestra como detonante del "empoderamiento" porque otorga a las personas conciencia de los riesgos a los que están expuestos y las obliga a emprender acciones de forma inmediata como un activo o recurso propio.

Por otra parte, una de las lecciones aprendidas desde esta investigación es que los históricos gobiernos de Sinaloa, de Sonora y los de la República Mexicana, no generaron experiencia en la implementación de medidas de mitigación del impacto social que genera construir embalses. No existe experiencia en torno a la relocalización de poblaciones, no se generaron planes de manejo o se consultó a la experiencia inmediata anterior. La lógica es que cada proyecto inicia desde cero, como una especie de experimento social, y solo a través de investigaciones como la presentada aquí se demuestra que los mismos errores se repitieron desde el primer desplazamiento (en 1945) hasta el último (en 2009).

En el ámbito de la investigación aún queda mucho por indagar en el tema del *desplazamiento forzado inducido por el desarrollo*, en concreto el provocado por la construcción de infraestructuras hidráulicas. Los estudios sobre los desplazados no pueden sino contemplar un análisis micro social y espacial acerca de cómo estas familias sortean su vulnerabilidad y recuperan la normalidad.

Bibliografía

- Aguilar Román, Janeth; Galmiche Tejeda, Ángel y Domínguez Domínguez, Marivel. 2012. "El contexto de vulnerabilidad de familias productoras de hule (heveacultoras): estudios de caso en el municipio de Huimanguillo, Tabasco". *Estudios sociales (Hermosillo, Son.)* 20 (39): 207-234. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572012000100008&lng=es&nrm=iso
- Alcina Romero, José A. 2003. "Vulnerabilidad psicosocial asociada al hecho catastrófico". *Apuntes de Psicología*, 21 (2): 377-389. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83938758001>
- Álvarez Ayuso, Inmaculada y Cadena Vargas, Edel. 2006. "Índice de Vulnerabilidad Social en los países de la OCDE". *Quivera. Revista de Estudios Territoriales* 8 (2): 248-274. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40180212>
- Aristegui, Iratxe; Beloki, Usue; Díez, Ainhoa y Silvestre, María. 2017. "Vulnerabilidad social percibida en contexto de crisis económica". *Revista Española De Sociología* 26 (3-SUP). <https://doi.org/10.22325/fes/res.2017.33>
- Aronsson, Inga-lill. 1992. "Impresiones de un proyecto de reasentamiento". *Alteridades* 2 (4): 51-59. <https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/638>
- Attanasio, Orazio y Székely, Miguel. 1999. "La pobreza en la América Latina: análisis basado en los activos; introducción". *El trimestre económico* 56 (263).
- Barabás, Alicia Mabel Bartolomé, Miguel Alberto. 1992. "Antropología y relocalizaciones". *Alteridades* 2 (4): 5-15. <https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/634>
- Bartolomé, Miguel Alberto y Barabás, Alicia Mabel. 1990. *La presa cerro de oro y el ingeniero el gran Dios. Relocalización y etnocidio chinanteco en México*. México: CONACULTA, Instituto Nacional Indigenista. Tomos I y II.
- Bueno Sánchez, Eramis y Diniz Álvez, José Eustaquio. 2008. *Pobreza y vulnerabilidad social. Enfoques y perspectivas*. México: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- Busso, Gustavo. 2001. *Vulnerabilidad social: Nociones e implicaciones de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Naciones Unidas.
- Brito Osuna, Pedro (coord.). 2009. *Picachos. Los caminos del desarraigo y la resistencia*. México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Cadena Vargas, Edel y Campos Alanís, Juan. 2012. "Vulnerabilidad social y comportamiento electoral: Un análisis por secciones electorales". *Papeles de población* 18 (71): 143-185. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252012000100006&lng=es&tlng=es.
- Cañedo Cázarez, Sibely y Mendoza Guerrero, Juan Manuel. 2017. "Desplazamiento forzado y empoderamiento femenino: el caso de la presa Picachos en el sur de Sinaloa, México". *El Ágora USB* 17 (2): 370-386. <https://doi.org/10.21500/16578031.3279>
- Carcedo, Franco. 2014. "La ocupación informal del suelo urbano como estrategia de

- supervivencia: un estudio de caso en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.” *HUELLAS*, 0 (17): 35-53. <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas/article/view/851>
- Castellón Osegueda, José Ricardo. 2021. “Estrategias de supervivencia y emociones. Unión informal y matrimonio en el Pacífico colonial centroamericano”. *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 18 (1). <https://dx.doi.org/10.15517/c.a.v18i1.45604>
- Cayuela Sánchez, Salvador. 2013. “Estrategias de supervivencia y modo de vida de autónomo. Un análisis socio-antropológico sobre tres casos en la agricultura murciana”. *Gazeta de antropología* 29 (1). <http://hdl.handle.net/10481/29092>
- Celaya Aguilar, Suzette Daniela. 2015. *Lo que El Novillo se llevó. Diversidad socioproductiva y laboral de los pobladores de Suaqui, Tepupa y Batuc y su repercusión ante el desplazamiento forzado (1920-1970)*. México: Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora.
- CEPAL. 2002. *Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Naciones Unidas.
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 2000. *Programa de manejo área de protección de flora y fauna islas del Golfo de California*. México: SEMARNAT.
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 2018. *Atlas del Agua en México 2018*. México: SEMARNAT.
- Consejo Nacional de Población (CONAPO). 2016. *Índice de marginación por localidad*. México: CONAPO.
- Cuevas Suárez, Ana de las y Escobar Martínez, Francisco José. 2009. “Caracterización espacial de la vulnerabilidad sociodemográfica en dos distritos madrileños ante riesgos tecnológicos.” *Cuadernos Geográficos* 45: 137-152. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v45i0.761>
- Diario Oficial de la Federación (DOF). 2010. *Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 697-64-37 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Conicarit, Municipio de Alamos, Son.* México: Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
- Duarte Alves, Andréia y Sterza Justo, José. 2011. “Espaço e subjetividade: estudo com ribeirinhos”. *Psicologia & Sociedade* 23 (1): 181-189. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309326567016>
- Egea Jiménez, Carmen; Sánchez González, Diego y Soledad Suescún, Javier. I. 2012. “Apuntes sobre los riesgos sociales, componente principal de la vulnerabilidad social”. En: *Vulnerabilidad social. Posicionamientos y ángulos desde geografías diferentes*, coordinado por Carmen Egea Jiménez, Diego Sánchez González y Javier I. Soledad Suescún, 57-68. Granada: Universidad de Granada, Colección Eirene (32).
- Enríquez Licó, Dora Elvia y Durán, Gustavo. 2017. “Las grandes presas en el río Yaqui (Sonora, México) y sus efectos socioambientales”. *Revista de Sociología y Antropología: Virajes* 19 (1): 165-188. <http://dx.doi.org/10.17151/rasv.2017.19.1.9>
- Esping-Andersen, Gosta. 2000. “Social Indicators and Welfare Monitoring”. *Programme Paper*

- on Social Policy and Development 2*. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).
- Evans, Sterling. 2006. "La angustia de La Angostura: Consecuencias socioambientales por la construcción de presas en Sonora". *Signos Históricos* 16 (8): 46-78.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-44202006000200046&lng=es&tlng=es.
- Evaristo de Araujo, Christianne y Lima, Roberto. 2018. "Resistencia popular a la hidroeléctrica Belo Monte: Sujetos colectivos y reivindicaciones socioambientales al estado brasileño". *Nueva antropología* 31 (88): 95-114.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362018000100095&lng=es&tlng=es.
- Fabre Platas, Danú Alberto. 2011. "Vulnerabilidad, reconstrucciones étnicas y estrategias de sobrevivencia en el trópico húmedo mexicano". *Cuadernos Geográficos* 48: 259-274. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17121091011>
- Fabre Platas, Danú Alberto y Egea Jiménez, Carmen. 2015. "Los espacios de intercambio. Los tianguis de Páztcuaro (Michoacán, México), entre la tradición y las estrategias de supervivencia". *Documents D'Analisi Geogràfica*, 61 (2), 265-287.
 doi:<https://doi.org/10.5565/rev/dag.105>
- Filgueira, Carlos. 2001. *Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social. Aproximaciones conceptuales recientes*. Naciones Unidas. Santiago de Chile: CEPAL-CELADE.
- Flores Flores, Gustavo. 2009. "Evaluación del impacto social en grandes presas: caso INAMBARI". *Revista de Investigaciones de la Escuela de Posgrado de la UNA PUNO* 5 (3).
<https://doi.org/10.26788/epg.v5i3.26>
- Foster, George M. 1976. "El proyecto de reacomodo en la zona del Papaloapan". *Antropología aplicada*. México: Breviarios del F.C.E. # 232.
- García Castro, Neftalí y Villerías Salinas, Salvador. 2016. "Los niveles de vulnerabilidad social de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México". *Revista Geográfica de América Central* 1 (56): 259-288.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/8103#:~:text=DOI%3A%20https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.15359%2Frgac.1-56.11>
- Hopenhayn, Martín. 2001. *La vulnerabilidad reinterpretada: asimetrías, cruces y fantasmas*. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL-CELADE.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *México en cifras*. México: Base de datos virtual. Disponible en Internet:
<https://www.inegi.org.mx/default.html>;
<http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/>
- Israel, Brian; Checkoway, Sam y Zimmerman, Mark. 1994. "Health education and community empowerment: Conceptualizing and measuring perceptions of individual, organizational and community control". *Health Education Quarterly* 21: 149-170.
<http://dx.doi.org/10.1177/109019819402100203>

- Jiménez García, Williams G., Manzano Chávez, Liliana y Mohor Bellalta, Alejandra. 2021. "Medición de la vulnerabilidad social: propuesta de un índice para el estudio de barrios vulnerables a la violencia en América Latina". *Papers. Revista de Sociologia* 1 (1): 1-32. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2850>
- Kaztman, Rubén. (coord.). 1999. *Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad en Uruguay*. Montevideo: Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Naciones Unidas.
- López González, José; Méndez Espinosa, José; Rappo Miguez, Susana; Damián Huato, Miguel; Álvarez Gaxiola, Jesús y Paredes Sánchez, Juan. 2018. "Transformaciones territoriales y estrategias de supervivencia: el caso del municipio de Calpan, Puebla-México 1990-2015". *Papeles de población* 24 (97): 255-283. <https://doi.org/10.22185/24487147.2018.97.32>
- Mancera González, Omar. 2019. Estrategias de supervivencia y empoderamiento de las comunidades desplazadas por presas en Sinaloa (México). En Egea, Carmen y Nieto, José (coords.). *Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las desigualdades*. España: Universidad de Granada, 171-185.
- Mancera González, Omar. 2014. La histórica vulnerabilidad socioambiental de Osumacinta, Chiapas. Legado de un proyecto hidráulico. En Soares, Denise y Gutiérrez, Isabel (coords.). *Reflexiones y expresiones de la vulnerabilidad social en el sureste de México*. México: IMTA, CATIE, 265-286.
- Mancera González, Omar. 2010. *Etnografía de la relocalización. Procesos socio-gubernamentales derivados de la presa Picachos, Sinaloa*. México: Tesis de Maestría en Antropología Social. Universidad Iberoamericana.
- Meneses Falcón, Carmen. 2019. "Desigualdad y estrategias de supervivencia en la población femenina de Haina, R. Dominicana". *iQual. Revista de Género e Igualdad* 2: 93-113. <https://doi.org/10.6018/iQual.342281>
- Minkler, Meredith. 1992. "Community organizing among the elderly poor in the United States: A case study". *International Journal of Health Services*. 22: 303-316. <http://dx.doi.org/10.2190/6KFL-N1WY-NPDG-RXP5>
- Mora Salas, Minor y Pérez Sáinz, Juan. 2006. "De la vulnerabilidad social al riesgo de empobrecimiento de los sectores medios: un giro conceptual y metodológico". *Estudios Sociológicos* XXIV (70): 99-138. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59807004>
- Moser, Caroline. 1998. "The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies". *World Development* 26 (1): 1-19. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)10015-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)10015-8)
- Muñoz, Francisco; Hernández, Esperanza; Alfaro, Fernando; Mancera-González, Omar; Pérez-Gallart, Susana y Scrig, María. 2018. "Empoderamiento pacifista". En: *Empoderamiento pacifista*, 19-54, coordinado por Patricia Valencia Londoño, Susana. Pérez Gallart y Omar Mancera González. Colombia: Universidad de Medellín.
- Neuburger, Martina. 2004. "Vulnerabilidad y estrategias de supervivencia de campesinos en

- espacios degradados. Ejemplos del centro-oeste brasileño". *Cuadernos de Desarrollo Rural* 52: 77-102.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1267>
- Ortiz Ruiz, Nicolás y Díaz Grajales, Costanza. 2018. "Una mirada a la vulnerabilidad social desde las familias". *Revista mexicana de sociología* 80 (3): 611-638.
<https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2018.3.57739>
- Palerm, Ángel. 1969. *Aspectos socioeconómicos del proyecto La Angostura*. México: Informe elaborado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Manuscrito original.
- Pérez de Armiño, Karlos. 1999. "Vulnerabilidad y desastres. Causas estructurales y procesos de la crisis de África". *Cuadernos de Trabajo* 24. Bilbao: Hegoa, Universidad del País Vasco.
- Pérez Quijada, Juan. 1992. "Reacomodos treinta años después". *Alteridades* 2 (4): 61-66.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74711363006>
- Prieto Borrego, Lucia. 2009. "El desafío a la escasez estrategias de supervivencia de las mujeres en la posguerra". *Andalucía en la Historia* 25: 30-35.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3094200>
- Ramírez Santana, Muriel; Rivera Humeres, Johana; Bernal Silva, Margarita y Cabieses Valdés, Bática. (2019). "Vulnerabilidad social y necesidades de salud de población inmigrante en el norte de Chile". *Migraciones Internacionales* 10.
<https://doi.org/10.33679/rmi.v1i36.2005>
- Rappaport, Julián. 1981. "In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention". *American Journal of Community Psychology* 1 (9): 1-25.
<http://dx.doi.org/10.1007/BF00896357>
- Reyes Morales, Rafael. y Gijón Cruz, Alicia. 2007. "Vulnerabilidad social de las mujeres y la población indígena en Oaxaca, 2005: restricciones y estrategias". *LiminaR* 5 (2): 90-107. <https://doi.org/10.29043/liminar.v5i2.253>
- Rodríguez Vignoli, Jorge. 2000. *Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jóvenes*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Romano, Mariana. 2021. "Vivir en la calle: estrategias entre las necesidades y las distancias". *Itinerarios de Trabajo Social* 0 (1): 63-69.
<https://doi.org/10.1344/its.v0i1.32284>
- Sadan, Elhiseva. 1997. *Empowerment and community planning: Theory and practice of people-focused social solutions*. Israel: Hakibbutz Hameuchad Publishers.
- Salamanca Ospina, Edwar y Egea Jiménez, Carmen. (2018). "La vulnerabilidad social de la población desterrada. Más allá del Goce Efectivo de Derechos". *Revista de Ciencias Sociales. Universidad del Zulia* 24 (4): 38-56.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28059581004>
- Sánchez González, Diego y Egea Jiménez, Carmen. 2011. "Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desventajas socioambientales: Su aplicación en el estudio de los adultos mayores". *Papeles de Población* 17 (69): 151-185.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

- 74252011000300006&lng=es&tlng=es.
- Sarmiento, Juan Pablo (2015). "Desplazamiento interno por proyectos de desarrollo". *Revista de Derecho*, 44: 1-6.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972015000200001&lng=en&tlng=es.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 2017. *Atlas Agroalimentario 2017*. México: SIAP, 2017.
- Solomon, Barbara. 1976. *Black empowerment: Social work in oppressed communities*. Estados Unidos de América: Columbia University Press
- Stern, Claudio. 2004. "Vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México." *Papeles de población* 10 (39): 129-158.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252004000100006&lng=es&tlng=es.
- Tejada, Annette. 2010. "Estudio de poblaciones en situación de desplazamiento a causa de proyectos de infraestructura en la República Dominicana". *Revista Tendencias & Retos* 15: 33-47. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929275>
- Valverde Lamsfús, María. 2012. "Estrategias de supervivencia de las mujeres pobres en Guipúzcoa. Los casos de San Sebastián y Tolosa (1885-1915)". *Historia contemporánea* 44: 183-204.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3964855>
- Vargas, Sara (2014). "La acción social y colectiva en situaciones de vulnerabilidad socioambiental con respecto al agua". En Soares, Denise y Gutiérrez, Isabel (coords.). *Reflexiones y expresiones de la vulnerabilidad social en el sureste de México*. México: IMTA, 31-50.

© Copyright: Omar Mancera González y Carmen Egea Jiménez, 2022.

© Copyright de la edición: Scripta Nova, 2022.

Ficha bibliográfica:

MANCERA GONZÁLEZ, Omar; EGEA JIMÉNEZ, Carmen. Vulnerabilidad social y estrategias de afrontamiento de las familias desplazadas y reubicadas en Sonora y Sinaloa (Noroeste de México). *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona: Universitat de Barcelona, vol. 26, Núm. 2 (2022), p. 1-26 [ISSN: 1138-9788]

DOI: 10.1344/sn2022.26.36755